

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 2 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital por el C. Manuel Ayala, contra los actos del Juez 3º de lo criminal, que lo mandó reducir á prisión poniéndolo en seguida á disposicion del Gobierno del Distrito, para que á su vez lo remitiera á Puebla á disposicion del Juez 3º de instruccion de la Sala de sentencia de la Capital de ese Estado, que dirigió exhorto á dicho Juez de lo criminal para la aprehension y remision del mencionado Ayala, por estar acusado del delito de peculado, con lo que el promovente cree violadas respecto de su persona, las garantías que consigna el artículo 16 del Pacto federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que segun la Constitucion particular del Estado de Puebla, la autoridad judicial no tiene propiamente ingerencia en los juicios de los Jefes políticos acusados de peculado, mientras no haya tenido lugar el juicio administrativo, con los trámites que en aquella Constitucion se determinan.

Que está probado en los autos, que no se ha observado ninguna de dichas prevenciones respecto del promovente Ayala, que fué Gefe político de los Llanos de Apam y está acusado de manejo no justificado de los fondos públicos durante su administracion.

Que en consecuencia, la autoridad judicial comun, es por ahora estraña á los procedimientos del juicio que debería verificarse para averiguar la culpabilidad del mencionado Ayala, de lo que se deduce su incompetencia y la violacion del artículo 16 de la Constitucion federal.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arceaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. Juan J. Díaz, contra el cobro que le hace el Administrador de rentas de Guaymas, de los derechos de introduccion de varios efectos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Juan J. Díaz pide amparo y proteccion, contra los procedimientos del C. Administrador de rentas de esta ciudad, por el cobro que se le hace de algunos efectos nacionales importados por la balandra "Artemisa," con cuyos procedimientos se le violan las garantías que le otorga la Constitucion general en sus artículos 4, 14 y 16. El que suscribe, cree bastante fundada su queja, supuesto á ser tan terminante la ley de 2 de Mayo de 1868, á la que se opone abiertamente la ley de clasificacion de rentas por la que se hace este cobro de 4 de Diciembre del año próximo pasado, prohibiendo aquella, que los Estados impongan mayores contribuciones á los efectos naciona-

les que las que exija á los suyos propios, y esta no impone ninguna á su exportacion; y en esa contradiccion se debe atender á la primera como ley general, y tener el carácter de suprema, por dimanar de la fraccion 9ª artículo 72 de la Carta fundamental, y prevenirlo así su artículo 126. En lo que no tiene razon el quejoso, es en el apoyo del artículo 14 de la misma Constitucion, lo que está desvanecido por el informe del empleado responsable, el que le exige esos derechos por la ley vigente en aquella época; y de ninguna manera por la de 29 de Mayo último que actualmente rige, y por lo mismo, no hay tal retroactividad.

Por todo lo ya expuesto, á V. pido se sirva decretar el amparo que solicita el C. Diaz, porque con él quedarán protegidas las garantías que le concede al peticionario el pacto federativo en sus artículos 4 y 16, y que han sido violadas por los procedimientos del C. Administrador de Rentas de esta ciudad, al exigirle los derechos de introduccion á los efectos nacionales, conducidos por la balandra "Artemisa."

Guaymas, Junio 22 de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Julio 4 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Julio 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Juan J. Diaz, contra el cobro del derecho de introduccion que le hace el C. Administrador de rentas de este puerto, por ochenta y nueve bultos panocha, con peso de cuatrocientas cuarenta y cinco arrobas; un bulto manteca, con cinco arrobas, y once fanegas frijol que recibió en la balandra "Artemisa" fondeada en este puerto el 14 de Mayo último. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; el pedido del C. Promotor fiscal; la citacion para sentencia y cuanto mas debió tenerse presente.

Considerando: que si bien el C. Juan J. Diaz no tiene razon al asentar, que el C. Administrador de rentas dá efecto retroactivo á la ley de 29 de Mayo ya citada, que derogó la de 4 de Diciembre del año próximo pasado, puesto que el cobro no se le hace en virtud de aquella, sino de esta ley vigente el 14 que se hizo la introduccion; sí la tiene en cuanto á que el cobro no es legal, por la contradiccion de la citada de 4 de Diciembre, con la general de 2 de Mayo de 1868.

Que solo en el caso de que el Sr. Administrador hubiese hecho el cobro de los derechos al tiempo de causarse, como debia, sin entrar en consideraciones de ninguna especie, y haberse hecho el pago virtual ó efectivo por el interesado ó consignatario; no tendria hoy lugar el amparo por ser extemporaneo, puesto que al hacer el pago, no se quejaba el interesado de violacion de garantía alguna, que es cuando procede legalmente el amparo.

Por lo expuesto y apoyado en los artículos 101, 102 y 126 de la Constitucion, este Juzgado falla:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Juan J. Diaz, contra el cobro que le hace el C. Administrador de rentas de esta ciudad, de ciento cuarenta y tres pesos treinta y siete centavos, por derechos de introduccion de ochenta y nueve bultos panocha, un bulto manteca y once fanegas frijol, traídas de Sinaloa en la balandra "Artemisa" que fondeó en este puerto el 14 de Mayo pasado.

2º: Notifíquese, publíquese en el periódico oficial del Estado, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Fernando María Astiazaran, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, así lo decretó, firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando María Astiazaran.—A.—P. del Rincon.—A.—P. A. Piña.*

Es copia que certifico. Guaymas, 6 de Julio de 1874.—*Fernando María Astia-*

zaran.—A.—P. del Rincon.—A.—P. Al
Pina.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Octubre 6 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. Juan J. Diaz, contra el cobro que le hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de los derechos de introduccion causados por ochenta y nueve bultos de panocha, un bulto manteca y once fanegas frijol; efectos nacionales que recibió en la balandra "Artemisa" fondeada en este puerto el 14 de Mayo último, cuyo cobro, segun manifiesta el quejoso, es contrario á la prohibicion que tienen los Estados, de gravar con mayores derechos á los frutos de otros Estados que á los propios, prohibicion impuesta por la ley de 2 de Mayo de 1868, expedida por el Congreso de la Union en uso de la facultad que le confiere la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion de la República, alegando tambien, que con el expresado cobro se vulneran las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la misma Constitucion.

Considerando: que no existe la violacion del artículo 14 constitucional, que se hace consistir por el quejoso en el efecto retroactivo que se dá á la ley de 29 de Mayo del presente año, conforme á la cual, segun alega, se le exigen los derechos de introduccion que recibió por la balandra "Artemisa;" pues los expresados derechos, segun aparece de las constancias de autos, se le han cobrado con arreglo á la ley de 4 de Diciembre próximo pasado.

Considerando: que la infraccion de la ley de 2 de Mayo, se hace consistir, en que sin embargo de que las leyes del Estado de Sonora gravan la introduccion de productos de otros Estados, ningun derecho tienen señalado los frutos del Estado á su extraccion, lo cual constituye una restriccion onerosa,

y un desnivel en el comercio de Estado á Estado.

Considerando: que no se ha alegado por el quejoso ni aparece justificado en estas actuaciones, que á los productos de Sonora de igual especie que aquellos á los cuales se exige el derecho de introduccion que ha dado origen á este recurso, esten libres de todo impuesto ó gravados con una contribucion menor que la asignada á los provenientes de otros Estados, condiciones indispensables para poder decidir que habia sido infringida la ley de 2 de Mayo de 1868.

Considerando: que no aparece, que la circunstancia de no estar gravados con un derecho de extraccion los frutos del Estado, perjudique algo los intereses de los introductores á Sonora de artículos de comercio proveniente de otros Estados, ni es esplicable como dicha franquicia puede haberse convertido en una restriccion onerosa en el comercio de Estado á Estado.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: 1ª: Se revoca la sentencia pronunciada en 6 de Julio del presente año por el Juez de Distrito de Sonora, que declaró haber lugar al amparo federal en el presente caso. 2ª: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Juan José Diaz, contra el cobro que le hace el C. Administrador de rentas de Guaymas de ciento cuarenta y tres pesos treinta y siete centavos, por derechos de introduccion de ochenta y nueve bultos panocha, un bulto manteca, y once fanegas frijol, conducidos de Sinaloa por la balandra "Artemisa" que fondeó en dicho puerto el 14 de Mayo pasado.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Catañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 2 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Santos Arteaga, contra la Gefatura política de ese Estado, por haberlo reducido á prision y sacado á trabajos en la obras públicas, con grillete.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Santos Arteaga asegura, que sentenciado á tres años de obras públicas por proteccion de fuga de los reos políticos Dámaso Ortega é Ignacio Colosa, libre ya á consecuencia de la ley de 27 de Julio de 1872, se le ha vuelto á reducir á prision, obligándolo á cumplir aquella pena arrastrando una cadena, con infraccion de los artículos 19 y 22 de la carta fundamental de la República, por lo que pide la suspension provicional del acto reclamado y el amparo de la Justicia federal.

Recibido el informe del C. Gefa político de la Capital, resulta: que siendo del orden comun el delito penado en Arteaga, no está comprendido en la ley de 27 de Julio de 1872, y que si extingia su condena como mozo del Capulin, por gracia especial del Supremo Gobierno del Estado, se ha hecho indigno de tal consideracion por faltas en el cumplimiento de sus deberes, razon por que trae el grillete como los demas presos

TOMO VI.—PARTE II.

y como medio de seguridad por falta de penitenciaría.

Aparece de lo practicado: que comun ó político el delito por que ha sido sentenciado Santos Arteaga, amnistiado ó no, vuelto á reducir á prision legitima ó ilegítimamente, imparcial ó apasionada la conducta observada respecto á él, es un hecho que trae grillete, y esto no como medida de seguridad, sino como verdadera pena, y pena infamante, verdadero tormento y de consecuencias trascendentales, caracteres que no dependen de la intencion de quien la aplica, sino que está en su propia naturaleza, y por tanto se encuentra comprendida en la prohibicion del artículo 22 de la Constitucion general; en cuya virtud, sustanciando el primer punto á que se refiere el peticionario, concluyo el que suscribe pidiendo: se decrete inmediatamente la suspension del acto reclamado, tramitando el recurso, sobre lo principal, con arreglo á lo dispuesto en el capítulo 3º de la ley orgánica de los artículos 101 y 102 de la carta fundamental de la Nacion.

Zacatecas, 28 de Agosto de 1874.—*Eduardo Pankhurst*.

Segundo pedimento fiscal.

C. Juez.

El personal de la Gefatura política de esta Capital, obsequiando el auto de 31 de Agosto último, informan no ser exacto, que Santos Arteaga estuviera en libertad á consecuencia de la amnistía decretada en 27 de Julio de 1872, sino que sentenciado por el delito de proteccion de fuga á tres años de obras públicas, por especial gracia del Supremo Gobierno del Estado estingua su condena separado del comun de los criminales, hasta que por faltas de cumplimiento de sus deberes, ha vuelto á ser reducido á formal prision para que se cumpla la ejecutoria respectiva.

Estos hechos están comprobados con los